Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos

Manuel Ollé Sesé, Luis Acebal Monfort, Nuria García Sanz (Coords.)
Presentan estas obras una diferente sensibilidad respecto a los problemas dolientes de la actualidad. Abren una dimensión crítica y solidaria con los conflictos acuciantes que afectan a las distintas etnias y grupos marginados por la modernidad ilustrada. Su finalidad es hacer un análisis de la convivencia social desde la demodiversidad y la pluralidad de opciones y creatividad cultural.

Asociación Pro Derechos Humanos de España

Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos

Coordinadores y autores
Manuel Ollé Sesé, Luis Acebal Monfort, Nuria García Sanz

Comité Asesor
Almudena Bernabeu García, Carmen Lamarca Pérez, Juan José López Ortega, Pedro Martínez Torrijos, Manuel Ollé Seré, Carlos Sleevy Prada

Colaboradores
Joaquín Albarello Fernández, Rafael de Ales Reig, Esteban Beltrán Yordes, Almudena Bernabeu García, Laura Botín y Fierro, Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, Ignacio Díaz de Aguilar Centeno, Ariel E. Dullhún, Concepción Escobar Hernández, Carmelo Faleh Pérez, Eduardo Fieder, Ana Paz Garibo Poyró, Álvaro Gil-Pretés y Gil-Delgado, José Antonio Gimbernat Ondog, Emilio Gines Sánchez, Hernán Herrasti, María Maldonado, Luis Jimena Querada, Carmen Lamarca Pérez, Antonio Pignau Solé, José Ricardo de Prada Salassa, Esteban Reyes Trujillo, Alejandro J. Rodríguez Carrón, José Luis Rodríguez Vilaseca y Prieto, Mark Taylor

LIBROS DE LA REVISTA ANTHROPOS

apdhe

ANTHROPOS
DERECHO internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos / Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Olea Sese, Luis Arribas Menéndez, José García Sanz, coordinadores. - Madrid: Antropos Editorial, 2009
319 p. : 24 cm. — (Libros de la Revista Antropos®)

Bibliografía, lectos


Pues quién negará que se elevó su carrera,y que en su perpeíto fué la sorgente más libre, con más puros,con más amor, con mayor sentimiento, con mayor felicidad. 

Johann Wolfgang von Goethe, Herman, I, (1795), Poesia: Horacio, versos 6-13

Primera edición en Antropos Editorial: 2000
© Asociación Pro Derechos Humanos de España, 2009
© Manuel Olea Sese et al., 2009
© Antropos Editorial, 2009
Edita: Antropos Editorial, S.L. (Barcelona)
www.antropos-editorial.com
Esta obra ha sido editada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España
Depósito legal: B. 54.793-2009
Diseño, realización y coordinación: Antropos Editorial
(Nuestra, S.L., Edif. Tel. 90 697 22 86 Fono: 93 587 26 61
Impresión: Novagraf, Vivakt, S. Menéndez & Reba
c
Impreso en España - Printed in Spain

Todas las ediciones contenidas en esta publicación no pueden ser copiadas, ni en todo o en parte, reproducidas en, o transmitidas por, ninguna forma o por ningún medio, sea mecánico, fotográfico, electrónico, digital o de cualquier otro tipo, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
20
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Ariel E. Dulitzky

El sistema interamericano de protección de DD HH, se desarrolla en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En sus 60 años de funcionamiento, el sistema ha tenido numerosos logros en la promoción y defensa de los DD HH de la región. Desempeñó un papel protagónico cuando en América Latina predominaban regímenes autoritarios, identificando y denunciando las graves y sistemáticas violaciones que ocurrían. Su acción contribuyó a la apertura de espacios en la sociedad civil y creó un clima propicio para el regreso de la plena vigencia de las libertades públicas. El informe sobre la situación de los DD HH en Argentina en 1979 es uno de los ejemplos paradigmáticos del rol del sistema interamericano en esos años.

Con el advenimiento de gobiernos elegidos democráticamente la situación de DD HH en América Latina avanzó considerablemente. La mayoría de los países no tienen políticas de violaciones graves planeadas o auspiciadas por el aparato de Estado, como ocurría en el pasado. Paralelamente, muchos Estados están empuñando en la mejora de la situación de los DD HH a nivel doméstico, impulsando reformas legislativas, promoviendo campañas educativas, capacitando a los miembros de la fuerza pública, entre otros. Sin embargo, la situación dista de ser óptima. La violencia policial, la ineficacia, corrupción e ineficiencia del Poder Judicial, la discriminación contra vastos sectores de la población, la pobreza e inequidad en la distribución de la riqueza, los altos índices de criminalidad son algunos de los rasgos comunes de la región.

En este contexto funciona el sistema interamericano de DD HH. Para describir sus rasgos esenciales en la primera parte explicaremos los principales documentos que detallan los derechos reconocidos a los habitantes de las Américas. En la segunda parte analizaremos el funcionamiento de los organismos creados para fiscalizar la vigencia de las libertades fundamentales en la región.

I. LOS INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS

A. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en mayo de 1948, es el primer instrumento internacional de su tipo ya que fue adoptada con 6 meses de antelación a la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno de las Naciones Unidas en diciembre del mismo año.

La Declaración Americana estableció el sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y
jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias».

Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que a pesar de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los 35 Estados miembros de la OEA.¹

La Declaración, además de su preámbulo, comprende 38 artículos que definen los derechos protegidos y los deberes correlativos. A diferencia de otros instrumentos posteriores, incluye un catálogo tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales.

B. La Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 21 de noviembre de 1969, sin embargo, no entró en vigencia hasta el 18 de julio de 1978. Este tratado es obligatorio para los 25 Estados que lo han ratificado o se han adherido a él.²

La Convención Americana tiene como propósito «consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre». Establece la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades en ella reconocidos así como su deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos.

La Convención, en 23 artículos, define los derechos civiles y políticos protegidos, que incluyen el reconocimiento de la personalidad jurídica, derechos a la vida y a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principios de legalidad y de retroactividad, derecho a indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, a la propiedad privada, de circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención se limita a exigir que los Estados adopten providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, por vía legislativa u otros medios apropiados³ (artículo 26).

¹. Los Estados miembros de la OEA son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

². Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana, el 26 de mayo de 1998.
En su segunda parte, la Convención Americana establece los medios de protección: la **Comisión Interamericana** de Derechos Humanos (CIDH) y la **Corte Interamericana** de Derechos Humanos (Corte IDH), a los que declara órganos competentes «para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de la Convención». La Convención define la estructura, organización, funciones y facultades de la Comisión y de la Corte así como el procedimiento referido al régimen de peticiones (denuncias) individuales y el derecho a obtener reparaciones en caso de que la Corte establezca que alguno de los derechos ha sido violado.

**C. Protocolos Adicionales a la Convención Americana**

El artículo 77 de la Convención permite la adopción de protocolos con la finalidad de incluir progresivamente otros derechos y libertades no reconocidos por la propia Convención. En 1988 se aprobó el **Protocolo Adicional** a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de **Derechos Económicos, Sociales y Culturales** (Protocolo de San Salvador). El Protocolo entró en vigencia el 16 de noviembre de 1999.³

Su Preámbulo contempla la indivisibilidad de todos los DD HH, al establecer que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales «constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente...». Estipula que «sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos».

El Protocolo requiere que los Estados partes adopten «las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo». Estos derechos son: derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, derechos sindicales, derecho a la seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura, a la constitución y protección de la familia, de la niñez, protección de los ancianos y de las personas con discapacidad (que el Protocolo llama «minusválidos»).

El artículo 19 del Protocolo establece los medios de protección de los derechos reconocidos, incluida la posibilidad de peticiones individuales por alegadas violaciones a la libertad sindical y a la educación.


³. Han ratificado el Protocolo: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

⁴. A esta fecha los siguientes Estados han ratificado el Protocolo: Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
D. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

En 1985 los Estados miembros de la OEA adoptaron la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta Convención incluye una precisa definición de tortura así como la exigencia de que se establezcan responsabilidades penales por la comisión de este delito. Los Estados se comprometen tanto a castigar severamente a los perpetradores de la tortura como a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. Las personas acusadas de cometer tortura no podrán evadir la acción de la justicia mediante la fuga al territorio de otro Estado, ya que se estipula la obligación de juzgarlas o extraditarlas. La Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura entró en vigor el 28 de febrero de 1987.5

E. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas6

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas constituye el primer tratado internacional en referirse específicamente a esta forma compleja de violación de los DD HH. Dicha Convención entró en vigor el 28 de marzo de 1996.7

Los Estados se comprometen a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada, así como a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito. Los Estados deben adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar este crimen. Asimismo se incluye el delito de desaparición forzada entre aquellos que justifican la extradición, a fin de evitar que personas acusadas de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al territorio de otro Estado parte.

F. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, entró en vigor el 5 de marzo de 1995. Este tratado cuenta con más ratificaciones que cualquier otro de DD HH adoptado en el marco de la OEA.8

La Convención de Belem do Pará define en forma detallada las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica, y

5. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela han ratificado esta Convención.
7. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son partes de este tratado.
8. Son Estados parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
G. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

El último tratado sobre DD HH adoptado en el marco de la OEA es la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Esta Convención entró en vigor el 14 de septiembre de 2001.

Este instrumento tiene por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar la plena integración de estas personas en la sociedad. El mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos en dicha Convención descansará sobre un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado parte.

II. LA COMISIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANAS DE DERECHOS HUMANOS

El Sistema interamericano se basa actualmente en la labor de dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Cada una de ellas está compuesta por 7 expertos, que actúan a título individual: los comisionados y los jueces son propuestos y elegidos por los Estados. La duración del mandato de los miembros de la Comisión es de 4 años y son reelegibles por una única vez; los jueces de la Corte actúan por períodos de 6 años y también son reelegibles una vez. Los miembros de ambos órganos trabajan a tiempo parcial. Tanto la CIDH como la Corte IDH generalmente celebran tres o más períodos de sesiones que se extienden durante aproximadamente 3 semanas en sus respectivas sedes o en otros Estados de la OEA.

La Comisión y la Corte actúan de acuerdo con las facultades otorgadas por distintos instrumentos legales debido a la particular evolución del sistema interamericano de derechos humanos.

9. Véase en el anterior capítulo específico lo referente a la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre el mismo tema.
10. Más atrás se ha dedicado el correspondiente capítulo a la más reciente Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
11. A esta fecha, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son parte de esta Convención.
12. Puede considerarse que existen otros organismos dentro de la OEA que cumplen funciones relacionadas con los DD HH, tales como la Comisión Interamericana de la Mujer, el Instituto Indígena Interamericano, el Consejo Jurídico Interamericano, el Instituto Interamericano del Niño. Sin embargo, sólo la Comisión y la Corte Interamericana tienen como función principal y exclusiva el trabajo sobre Derechos Humanos.
13. Washington, EE UU, para la Comisión, y San José, Costa Rica, para la Corte.
Pueblo y sin discriminación. La intervención para proteger a la mujer y a los niños, la erradicación sin violencia con la sustitución de drogas, así como medidas para evitar, s.

**Políticas de Finanzas**

Para que las finanzas públicas se conviertan en un instrumento efectivo para la transformación social, es necesario que sean transparentes, eficientes y respeten los derechos humanos. El Estado debe garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos y la equidad en la asignación de recursos. Es importante que las finanzas sean utilizadas para financiar programas de desarrollo social, educación, salud y vivienda. Es fundamental que las finanzas públicas se administren de manera eficiente para que el dinero llegue a las personas que lo necesitan.

**Derechos Humanos**

La Constitución Política de la República de México reconoce el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, así como la igualdad ante la ley. Todos tienen el derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Es necesario garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de asociación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como objetivo principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en América Latina. La Comisión tiene la obligación de investigar y analizar denuncias individuales, así como de realizar observaciones y recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para que se respeten los derechos humanos.

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos (DD HH) y, en el ejercicio de su mandato:

- Recibe, analiza e investiga denuncias individuales que alegan violaciones de los DD HH.
- Observa la vigencia general de los DD HH en los Estados de la OEA. Cuando lo considere conveniente, publica informes especiales sobre la situación en un Estado en particular. Ha publicado 57 informes sobre los DD HH en 20 países.
- Realiza visitas in loco a los Estados para profundizar la observación general de la situación y/o para investigar una situación particular. La Comisión ha realizado más de un centenar de visitas a 23 Estados. Generalmente, tras esas visitas, la Comisión prepara el informe al que nos referimos en el punto anterior.
- Formula recomendaciones a los Estados de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los DD HH.
- Requiere a los Estados que adopten medidas cautelares para evitar daños graves e irreparables a los DD HH en situaciones urgentes, tales como en casos de personas amenazadas o personas condenadas a la pena de muerte. También puede solicitar que la Comisión Interamericana requiera medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia.
- Somete casos a la jurisdicción de la Comisión Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos casos.
- Solicita «Opiniones Consultivas» a la Comisión Interamericana sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana o de otros tratados.

La Comisión en los últimos años ha adoptado la práctica de crear relatorías temáticas para resaltar la importancia de algunos temas que la Comisión entiende cruciales en la vigencia efectiva de los DD HH en el hemisferio. Las relatorías actualmente existentes son sobre derechos de las mujeres, de los niños, de pueblos indígenas, de afrodescendientes, de trabajadores migratorios y sus familias, de personas privadas de libertad y de libertad de expresión.

La Comisión es el primer órgano competente en el procedimiento de solicitudes individuales. Hasta la fecha ha recibido más de 13,000 denuncias de éstas.
tipo. Como resultado de un proceso semi-judicial entre el Estado y los denunciantes, la Comisión establece la existencia o no de responsabilidad internacional del Estado por la violación de uno de los derechos protegidos. La Comisión formula recomendaciones al Estado para reparar la violación cometida. Si el Estado no sigue las recomendaciones, la Comisión puede enviar el caso a la Corte o emitir un informe final que es publicado y presentado a la AG de la OEA para que determine la existencia de responsabilidad del Estado denunciado y formule recomendaciones para reparar la violación cometida.

La Corte es un tribunal jurisdiccional que tiene una doble competencia: contenciosa y consultiva. La función contenciosa se refiere a su capacidad de resolver casos de alegadas violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana. Para que la Corte pueda intervenir en un caso se requiere que se haya concluido el procedimiento ante la Comisión. Como se dijo, una vez agotado éste, sólo la Comisión o un Estado pueden someter el caso ante la Corte, siempre y cuando el Estado denunciado haya aceptado la jurisdicción obligatoria, o acepte la jurisdicción en el caso concreto. Veintiún Estados parte de la Convención Americana, con una población conjunta de 500 millones de habitantes, han reconocido la competencia contenciosa de la Corte.14

Los individuos no tienen en el sistema interamericano un acceso autónomo ante la Corte, esto es, no pueden enviar directamente un caso a la Corte. Aunque sí tienen representación independiente ante la misma una vez que la Comisión o el Estado presentaron el caso ante la Corte. Si el tribunal interamericano decide que existió una violación a la Convención, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados y si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Hasta finales de 2007 la Corte había resuelto más de 90 casos.

La función consultiva de la Corte se refiere a su capacidad para interpretar la Convención y otros instrumentos internacionales de DD HH. Puede ser activa por cualquiera de los Estados y ciertos órganos de la OEA, especialmente por la Comisión Interamericana. Dicha facultad fue utilizada con mayor asiduidad que la competencia contenciosa durante los primeros años de existencia de la Corte. En sus 19 opiniones consultivas, la Corte ha establecido importantes pautas sobre algunos temas cruciales para la efectiva protección de los DD HH como el habeas corpus y las garantías judiciales en estados de emergencia, la pena de muerte, los derechos de los trabajadores indocumentados, los derechos de los niños, la no discriminación o la libertad de expresión.

III. REFLEXIONES FINALES

Resulta impresionante que en el continente americano, con una historia de violaciones graves y masivas, con dictaduras militares y guerras civiles, se haya desarrollado y consolidado un sistema regional de protección de los DD HH. El sistema interamericano, en una región plagada de injusticias, inequidades y debi-

14. Se trata de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
lidades judiciales, crea la posibilidad de contar con un **espacio de diálogo entre Gobiernos y sociedad civil** ante órganos imparciales. Ello es sumamente valioso y ayuda enormemente a consolidar la democracia y el Estado de Derecho. Que los gobernantes tengan que rendir cuenta pública de sus acciones y omisiones, que los defensores de los DD HH puedan presentar sus propios argumentos y probar sus alegaciones y que la Comisión y la Corte deban sopesar cada uno de ellos y decidir, es de por sí una lección cívica para todos.

La creación y consolidación del sistema interamericano ha sido un **proceso difícil**, largo, costoso, pero ha dado sus frutos y los continuará dando en el futuro. Las víctimas, los familiares, los seres de carne y hueso, los que sufren los atropellos, los marginados, los desplazados, son quienes más se han beneficiado por la actividad del sistema interamericano. Son personas, con nombres y apellidos, que han encontrado como un organismo internacional les dio la razón y escuchó lo que sus propias autoridades no quisieron oír. El Sistema Interamericano reivindó su nombre, les dijo que no estaban solas, y les dio una esperanza para seguir luchando y viviendo. O quizás les permitió que puedan llorar a sus seres queridos con dignidad.